

Análisis de Coyuntura

REVISTA MENSUAL

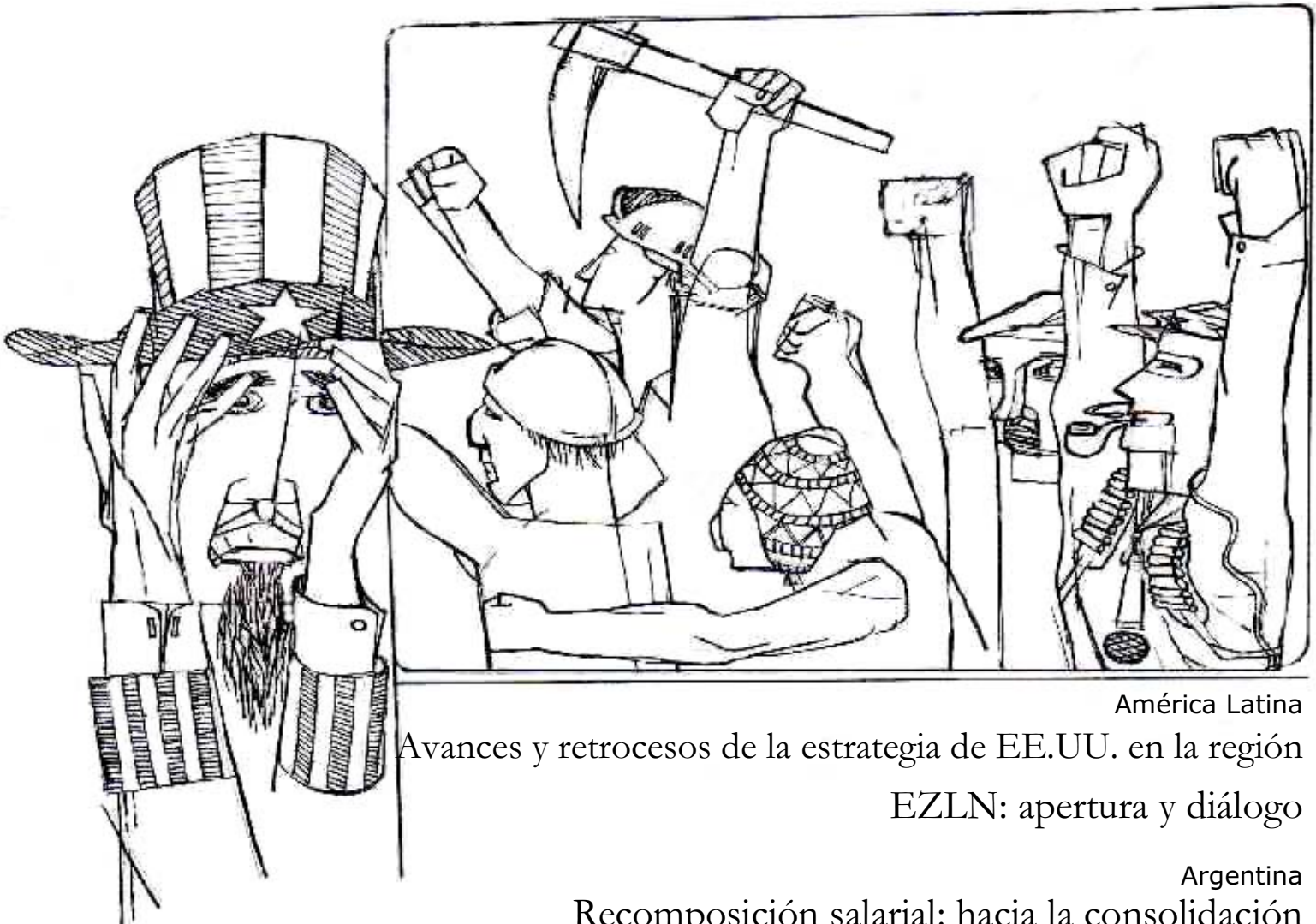
JULIO DE 2005

AÑO IV • Nº 61

1 PESO

Situación Mundial

Irán: los resultados de las elecciones presidenciales estimulan la concreción de alianzas de cara al enfrentamiento con EE.UU.



América Latina

Avances y retrocesos de la estrategia de EE.UU. en la región

EZLN: apertura y diálogo

Argentina

Recomposición salarial: hacia la consolidación de un esquema de distribución cada vez más desigual

El armado de listas para octubre se cocina a fuego lento

Situación Mundial

Pelea por las ganancias

La diversificación de las alianzas: ¿muestra de la insuficiencia de la fuerza?

Situación Política

República Islámica de Irán: su excepcionalismo, desde la escisión a la Revolución

Elecciones presidenciales en Irán: más ceremonias para el enfrentamiento

América Latina

Pelea por los mercados

Los duros intentos de Integración.

Situación Política

OEA: otro fracaso en el intento de imponer la hegemonía norteamericana

Cumbre de Presidentes del MERCOSUR en Paraguay

Brasil: sálvese quien pueda

Seguridad

Inmunidad a las tropas norteamericanas en Paraguay

Conflicto social

Nueva estrategia política del EZLN

Bolivia : entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que tarda en nacer

Argentina

Pelea por las ganancias

El sinuoso tránsito hacia el acuerdo “mínimo”

Control de capitales, intervención y desacuerdos con las privatizadas

El largo proceso de reacomodo salarial

Coyuntura política

Elecciones de octubre: el desconcierto de las internas

PJ y Frente Para la Victoria, sin acuerdo en la provincia de Buenos Aires

El ARI “renovado” lleno de radicales, y el radicalismo cada vez más vacío

Por derecha y por izquierda, las mismas complicaciones

Neuquén: todo es posible en la dimensión desconocida

El dardo eclesiástico al plebiscito kirchnerista

Conflicto social

Análisis de Coyuntura

Revista Mensual
Julio de 2005
Año IV • N° 61

Equipo de trabajo: Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Sebastián Juncal, Julián Kan, Florencia Mazzadi, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak. Dibujo de tapa: Ariel Muñiz.

Fuentes consultadas: EE.UU.: *New York Times* (NYT); *Washington Post* (WP); *Usa Today* (UT) y *Washington Times* (WT). – Francia: *Le Figaro* (LF); *Le Monde* (LM) – Gran Bretaña: *The Economist* (TE); *BBC News* (BBC) – España: *El País* (EP); suplemento Nueva Economía de *El Mundo* (NEEL) – México: *La Jornada de México* (LjDM) – Venezuela: *El Universal* (EUn) – Colombia: *El Tiempo* (Et) – Bolivia: *Los Tiempos de Cochabamba* (LTC) – Perú: *La República* (LR) – Brasil: *Folha de Sao Paulo* (FSP); *O estado do Sao Paulo* (OSP); *Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo* (FDT-FSP) – Argentina: *Clarín* (C); *La Nación* (LN)

Para contactarnos: informecon@yahoo.com.ar

Números anteriores: www.geocities.com/informecon

En este número

Los desequilibrios globales lejos de resolverse, se agudizan. En el caso de EE.UU., los déficits fiscal y comercial son claramente insostenibles: no sólo es deudor neto (tiene desde mediados de la década de 1980 más deudas que acreencias) sino que además el balance entre cobranzas y pagos de rendimientos de capital se está acercando a cero. Hasta ahora, los rendimientos de las inversiones de EE.UU. en el extranjero superaban a los rendimientos de las inversiones de extranjeros en EE.UU. y esto significaba un flujo de miles de millones de dólares hacia EE.UU. Pero con las tendencias actuales se calcula que hacia fin de año, el sentido de ese flujo se habrá revertido, agravando la necesidad de más financiamiento para cubrir todos estos déficits. Por el momento las vulnerabilidades se cubren con más endeudamiento público y privado, y con precios artificialmente altos en acciones, bonos e inmuebles.

Y mientras el forzoso aterrizaje a la realidad se pospone, se trata de intervenir tanto como se pueda para que los daños los carguen otras espaldas, entre otras, las de productores de materias primas clave. De ahí que analicemos la situación de Irán a partir de lo ocurrido en las últimas elecciones en ese país, rastreando en su historia y su presente los elementos que explican cómo el segundo productor de petróleo de la OPEP sostiene un enfrentamiento prolongado con los EE.UU.

EE.UU. también ve resistencias a sus políticas en América Latina. Frente al conjunto de los países del continente no consigue hacer avanzar su agenda política, que no es otra que la de intervenir en cualquier espacio en que una alianza social anti-hegemónica consiga imponerse en la dirección de la sociedad. Así en la OEA, al cantado rechazo venezolano a nuevas formas de *proteger la democracia*, se sumaron —como hace rato— Argentina y Brasil, también Uruguay —síntoma del recambio de Batlle por Tabaré— y más sorprendentemente México. Donde EE.UU. pudo anotarse una a su favor fue ante Paraguay, que aprobó ejercicios conjuntos con tropas estadounidenses y les concedió inmunidad, consiguiendo una posible avanzada estratégica en medio de Sudamérica. Por otro carril corren el proceso de integración y el avance de sectores sociales largamente marginados. La integración que marcha en el caso del Mercosur y su Fondo para la Convergencia Estructural, y la que no tanto en el caso de la integración financiera propuesta por Venezuela. En cuanto a las luchas sociales, tenemos al zapatismo proponiendo “*contra otra política, por un programa de izquierda y por una nueva constitución*”, y al movimiento social boliviano obteniendo la renuncia definitiva de Mesa y de sus sucesores forzando el llamado a elecciones.

En Argentina no ceden las presiones de los capitales más concentrados, esta vez no sólo criticando el trato del gobierno a las privatizadas, sino también cuestionándose desde el FMI —en medio de negociaciones— la intervención sobre la cotización del dólar, el corazón de la política económica del gobierno. A esto, y a acusaciones de ausencia de política económica, el gobierno en cierta forma respondió estableciendo un control sobre la entrada de capitales. Por otra parte, continúa la lucha por el salario y en el plano político a medida que se acercan las elecciones se desnuda qué cercana en el tiempo está el estallido de los partidos políticos y lo vigente de su crisis de legitimidad.

Pasen y lean...

Situación Mundial

Un auténtico mosaico de relaciones de fuerzas contrapuestas, entrecruzadas y contradictorias tapiza el globo. Las necesidades parecen marcar el ritmo de la concreción de las alianzas de las distintas fracciones del capital, encorsetadas por el ámbito político de la acumulación que le corresponde: nacional en su mayoría, regional para algunos, pero

siempre insuficiente para los deseos proyectados en forma de planes de inversión para cada capital individual. Veremos en los casos de Irán y China alianzas pragmáticas en sector de la energía, sector de importancia estratégica que no hace falta subrayar.

Pelea por las ganancias

La diversificación de las alianzas: ¿muestra de la insuficiencia de la fuerza?

Irán es el segundo mayor productor de la OPEP y detenta las segundas reservas mundiales de petróleo, lo cuál lo sitúa en una posición delicada. En su momento, la revolución en ese país llevó el precio a su récord histórico (US\$ 90 en valores actualizados por la inflación al día de hoy) que aún no fue superado. Los US\$ 60 que actualmente alcanza el barril estimulan el apetito por petróleo bueno, barato y garantizado. Aquéllos que no disponen de suficientes reservas o cuyo equilibrio entre producción y consumo es negativo procuran cortejar al régimen iraní para conseguir sus favores. La peculiar situación del país y su enfrentamiento prolongado con EE.UU. lo obligó a emprender la búsqueda de nuevas alianzas que pudiesen proveer la tecnología necesaria para extraer y refinar el petróleo y los mercados consumidores del mismo. Actualmente, la proliferación de ese tipo de alianza incómoda que entremezcla a regímenes políticos poco proclives a colaborar y que controlan las regiones ricas en reservas (Irak, Irán, Venezuela, Sudán, etc.), con empresas de escala gigantesca que son las únicas capacitadas para colocar el producto en el mercado, llevó a la rama energética a una situación límite. Su rol estratégico permitió, por otra parte, que *“la cantidad de ingenieros de petróleo en EE.UU., durante mucho tiempo el proveedor líder mundial de dicho talento, ha descendido casi a la mitad desde los '80. El ministro saudita de petróleo Ali Naimi, dijo que este mes los costos de los proyectos de energía han ascendido hasta un 60% a causa de la escasez de ingenieros capacitados, equipamiento y materias primas. Mientras las empresas de ingeniería señalan que las dificultades existen porque los productores de petróleo no han invertido suficiente en nueva producción en las décadas recientes para justificar grandes fuerzas laborales en los gigantes de servicios petroleros”* (WSJ 28/6/05). Esto contribuyó a retrasar la demanda respecto de la oferta, alimentando así el

aumento de precios¹. En un momento de reorganización productiva a escala mundial, donde la deslocalización permite incrementar formidablemente la ganancias por unidad de capital fijo invertido – por reducción del costo del capital variable tanto en forma directa como por el costo de su reproducción–, la energía se transformó en un insumo vital. El abastecimiento fluido y apropiado pasó a ser fundamental, por dos motivos: por un lado, por conformar la fuerza motriz de los procesos de producción y circulación; y por el otro, por convertirse en un mecanismo de reasignación del valor producido a favor de los países centrales, pues son aquéllos que disponen, por obra y gracia del desarrollo histórico, de la tecnología y los recursos en la escala indicada para explotar productivamente el recurso.

De esta forma, las alianzas van siendo modeladas por estas necesidades cruzadas. Respecto de Irán, si bien existe un congelamiento de su plan nuclear² desde el 15 de noviembre de 2004, nunca ha dejado de anunciar sus planes de continuar con sus proyectos (siempre aclarando sus fines pacíficos). Pese a ello, la Unión Europea –que encabeza las negociaciones– recibió el guiño de los EE.UU. para que en el diálogo negocien el ingreso de ese país a la OMC, que venía bloqueando desde 1996, a cambio del definitivo abandono del plan nuclear. Irán se mantiene, por el momento, firme en su decisión (NYT 27/5/05).

En el caso de China, la empresa con participación estatal CNOOC ofertó 18.500 millones por la petrolera estadounidense Unocal, superando así en 2.000 millones la oferta que hiciera ChevronTexaco y despertando temores en todo el espectro político. Enfrascadas en una guerra de ofertas *“ChevronTexaco y CNOOC tienen operaciones conjuntas en el Mar de China y se encuentran negociando la transferencia*

¹ *“Puedo ver al petróleo a US\$ 90 el barril para el 31 de marzo del año próximo” sostuvo Philip Verleger Jr., del Institute for International Economics con sede en Washington”* (WSJ 21/6/05).

² Vladimir Putin fue uno de los primeros en felicitar a Ahmadinejad por su victoria. Rusia es el proveedor de tecnología nuclear de Irán.

de la explotación de yacimientos de gas en Australia de la gigante norteamericana a la estatal china” (WP 25/6/05). Ambas compañías son una muestra cabal de la forma en que esta rama se conduce: sus protagonistas son a la vez, socios y competidores. Pese a ello, el Congreso ya estableció prevenciones para evitar la venta. Resta saber qué repuesta dará China –uno de los principales tenedores de bonos del tesoro norteamericano y con seguridad el de mayor tasa de crecimiento– que desea diversificar sus inversiones avanzando ahora sobre empresas

(cosa que comenzó a hacer reduciendo sistemáticamente su acumulación de bonos y financiando la compra de empresas en el exterior, que pasó de prácticamente 2.000 millones de dólares anuales en 2004 a cerca de 20.000 en lo que va del 2005). Además, algunos sectores dentro de EE.UU. se oponen a medidas restrictivas pues “solo China ha permitido que Wal-Mart produzca ventiladores por U\$S 2 y luego los venda en EE.UU. por U\$S 40” (WSJ 29/6/05).

Situación Política

República Islámica de Irán: su excepcionalismo, desde la escisión a la Revolución

Islam

La historia del Irán independiente, libre de dominación extranjera, comienza en 1501, cuando sucesivas dinastías afirman definitivamente un poder centralizado en el *shah*. En la larga historia anterior de la región, dos hechos marcarían de una vez y para siempre la evolución de Irán y sentarían las bases de su excepcionalismo. El primero de ellos tiene que ver con la conquista por parte del califato árabe en 642, suceso inscripto en el avance general de las tribus de la península arábiga sobre su entorno. El Islam constituía uno de los mecanismos movilizantes con que contaban las restringidas y minúsculas clases dominantes para movilizar los vastos contingentes que componían las clases subalternas. Así conocería la región las “palabras directas de Dios”, es decir, el *Corán*. En segundo lugar, la impronta que dejaría la facción que dominó gran parte de Irak e Irán luego de las luchas sucesorias tras la muerte de Mahoma. Esta cuestión supondría, entre otras cosas, una mayor y más estricta observancia de las escrituras³.

Al tener sólo una hija como descendencia, la muerte de Mahoma en 632 derivó en una fratricida lucha por el poder entre la tribu hashemita⁴ y el resto de las tribus. Además de ser primo del profeta,

el estar casado con su hija Fátima significó, en lo inmediato, cierta ventaja para Alí. A este hecho se sumaba que el pueblo presionaba para ungirlo como Califa. Una vez en el poder, la tribu de los Umayyads (con algún parentesco con los hashemitas pero varias generaciones atrás) comenzó a conspirar contra él, no sin antes asegurar su control de la región que hoy ocupa Siria. Finalmente, lograrían asesinar a Alí en 661, y también a su sucesor, el nieto mayor de Mahoma, Imán Hasan. Ante esto, Yazeed, líder de los Umayyads, buscó hacerse con el trono. Dependía para ello, del apoyo del resto de la familia del profeta, quienes se negaron a jurarle lealtad. Como consecuencia de esto y para evitar un baño de sangre en la ciudad santa de Medina, el nieto menor de Mahoma, Iman Hussain dejó la ciudad. Pues sobre él pesaba una condena a muerte ordenada al gobernador de Medina por Yazeed. Este último lanzaría todo un ejército en su búsqueda, asesinando en Karbala, en el año 680, al Iman Hussain y a 72 miembros de su familia y haciendo prisioneros al resto. A partir de este hecho, y como medida de defensa y protección, los seguidores de Alí van a conformar una línea del Islam, conocida como “shíi”, que se va dotar de doctrinas y costumbres más rigurosas. En el resto del mundo musulmán van a continuar coexistiendo distintas orientaciones que a partir de ese momento van a diferenciarse en torno a la posición frente a la familia del profeta: ninguna va sostener su carácter divino como lo hicieron los “shíies”, se situarán en algún lugar entre el respeto o el rechazo. Recién en el siglo XVIII, una doctrina oriunda de Arabia Saudita, el “wahabismo”, va a cristalizar las diferencias entre las tendencias remanentes. Los “wahabitas” van a proclamarse seguidores de Yazeed y su tribu. La inmensa mayoría restante, mientras tanto, va a declararse como la ortodoxia del Islam, comúnmente denominada “suní”. A tal punto van a continuar profundizándose las diferencias, que tanto los eruditos “sunís” como los “shíies”

³ Los “chíies” se diferencian del resto centralmente por el tema de la sucesión (consideran a la familia del profeta como sagrada) y por algunas interpretaciones del *Shari'ah* (código de moralidad y deberes religiosos basado en el *Corán* y en el *Hadith*). El martirio honorable constituye una tradición y la nación tiene que regirse por un gobierno regido por Dios a través del Imán.

⁴ Los musulmanes creen en todos los profetas de la *Biblia*, simplemente Mahoma es el último y más importante de los profetas de Alá, pues recibió las palabras directas del Dios. Es la religión final, la perfección de todas las revelaciones divinas anteriores.

van a declarar al “wahabismo” como no perteneciente al Islam.

República

Los alzamientos nacionalistas de principios del siglo XX obtuvieron del *shah* una constitución limitada en 1906 y un parlamento desde 1907. La secesión de la República Soviética de Gilan entre 1920 y 1921 en el norte, fue la mayor demostración del fracaso del sistema en dar respuesta a las demandas sociales. La respuesta provino, una vez más, de las fuerzas armadas. Reza Khan, un oficial del ejército, tomó el gobierno en 1921, para luego fundar la dinastía “Pahlevi” en 1925, al nombrarse *shah*, y así iniciar un proceso de centralización del poder y de afianzamiento de la autoridad sobre las tribus y provincias.

Por esta época, Inglaterra ejercía de facto un protectorado sobre Irán. La Segunda Guerra Mundial cambiaría esta situación. En 1951, el primer ministro Mossadegh forzó al parlamento a nacionalizar la industria petrolera, propiedad de empresas británicas. Luego de un período de incertidumbre —que incluyó la fallida destitución de Mossadegh y el posterior exilio del *shah*—, un golpe por parte de los partidarios del *shah* en el país, y con abierto apoyo norteamericano, devolvió las riendas a la dinastía. El regreso implicó una deuda de gratitud que sería cancelada con el acuerdo defensivo firmado con EE.UU. en 1959 y con el reconocimiento del estado de Israel en 1960. Por supuesto, esto le valdría el destierro completo del mundo musulmán y una extensión a Irán del bloqueo de la Liga Árabe decretado contra Israel. Así y todo, el rumbo pareció reencauzarse con una combinación de medidas como la “Revolución Blanca”, lanzada por el *shah*, y la represión sistemática a la oposición (asesinatos, persecuciones, exilios, etc.).

A partir de 1970, los religiosos de un Islam cada vez más militante, empujados desde su exilio en Francia por el Ayatollah Khomeini, encabezaban la creciente oposición. A fines de 1978, tres años después de haber decretado la abolición del sistema multipartidista por el de partido único⁵ el *shah* huía, cediendo definitivamente el poder. Una vez derrocado éste, Khomeini —apoyado por el clero shií y amplios sectores de la población— presidió la instauración de una República Islámica. El nuevo régimen acabó con las estrechas relaciones que el país mantenía con Estados Unidos⁶, y ejecutó a

muchos miembros de la *Savak* (policía secreta) y partidarios del *shah*⁷. El régimen intentaba crear una nueva maquinaria estatal que hiciera frente a la crisis económica, al descontento interno y a las amenazas exteriores. En diciembre de 1979, finalmente se promulgó una constitución que instauraba la República Islámica (teocracia regida por la ley islámica o *sharia*), celebrándose en enero de 1980 las primeras elecciones presidenciales regidas por ella.

La respuesta norteamericana no se hizo esperar. Aunque no fue directa sino que para la misma utilizó a su flamante aliado: Irak. En septiembre de 1980, este país reclamó la revisión de los Acuerdos de Argel⁸ y la autonomía para la minoría árabe. Cuando Irán rechazó estas demandas, Irak invadió Irán, dando inicio a la guerra entre ambos países, la cual hasta su finalización en 1988 provocaría alrededor de 1.700.000 muertos.

Elecciones presidenciales en Irán: más ceremonias para el enfrentamiento

Radiografía del estado iraní

El gobierno está compuesto por órganos electivos y no electivos. En estos últimos reside el poder real, que dispone de capacidad de veto sobre prácticamente cualquier hecho y controla la interpretación y aplicación de la ley suprema, la *sharia*. Ésta se sitúa por encima de toda ley, como proclama la constitución expresamente. De esta forma, los intérpretes de la palabra de Dios, a través de sus ór-

se en Teherán fue asaltada por militantes shiíes que tomaron como rehenes a 66 miembros del servicio diplomático. 13 de ellos fueron rápidamente liberados, pero a cambio de los otros 53 Irán exigió el público arrepentimiento de Estados Unidos por su apoyo al *shah*, la entrega de éste para ser sometido a juicio (condición anulada tras la muerte del *shah* en 1980) y la devolución de los miles de millones de dólares que se pensaba que éste había evadido ilegalmente del país. Finalmente, fueron liberados en enero de 1981.

⁷ Los Guardias de la Revolución fueron creados en mayo de 1979 debido a que los religiosos sospechaban que el Ejército Iraní seguía siendo partidario del antiguo régimen y a que muchos de sus oficiales habían sido formados por los Estados Unidos. Hoy en día, Irán posee dos ejércitos, las fuerzas armadas convencionales —encargadas de proteger el territorio— y los Guardias de la Revolución, encargados de proteger los logros de ésta. Cuatro de los siete candidatos pertenecen o pertenecieron alguna vez este cuerpo.

⁸ Irak e Irán mantuvieron durante largo tiempo una disputa territorial por Shatt Al-Arab y varias islas del golfo Pérsico. En 1971 Irán ocupó estas islas e Irak respondió con la ruptura de relaciones diplomáticas. Los dos países resolvieron temporalmente sus diferencias en marzo de 1975 mediante los Acuerdos de Argel.

⁵ “Rastajiz”, Partido de la Resurrección Nacional.

⁶ En noviembre de 1979, tras autorizar Estados Unidos la entrada del *shah* en su territorio, la embajada estadounidense

ganos de gobierno⁹, son los que detentan el poder de decisión y determinan quiénes pueden acceder a cualquier cargo electivo. A la cabeza de ellos se sitúa el Líder Supremo o Gran Ayatollah.

Los dos principales cargos electivos son la presidencia en el poder ejecutivo y la asamblea unicameral de 270 miembros por el legislativo (dictar justicia es una atribución de los clérigos). Si bien limitada por el poder del clero “chii”, la presidencia es muy importante en numerosas cuestiones ejecutivas (por ejemplo, designa al vicepresidente y a los ministros, aunque estos puedan ser vetados). Ese cargo es lo que se puso en juego en las elecciones del 17 de junio.

Antecedentes electorales

La muerte de Khomeini en junio de 1989, significó un punto de inflexión. El presidente de ese momento, Khamenei, pasó a ocupar el lugar dejado por el “padre de la revolución” y en las elecciones de ese año resultó elegido presidente, por abrumadora mayoría y con una participación masiva, el confidente del líder fallecido y comandante de las fuerzas armadas, Rafsanjani —quien es reelecto en 1993, aunque en esa oportunidad por un margen menor y con declinante participación. A partir de ese momento, parece cambiar la tendencia, que finalmente se expresaría de manera categórica con la victoria reformista en 1997 de Khatami. La elección constituyó toda una movilización de los sectores que propugnaban un cambio: la participación alcanzó el 89% y el presidente electo se alzó con un 70% de los votos. En las elecciones de 2001, Khatami fue reelegido pero nuevamente con apoyo notoriamente declinante, como vemos en el cuadro más adelante.

La presente elección¹⁰

Luego de dos presidencias, y ante la imposibilidad de presentar a Khatami como candidato para ser reelegido (lo prohíbe la constitución), el sector reformista se enfrentaba con cierta dispersión del voto, pues amplios sectores llamaban a la abstención. Un problema mayor era el profundo descontento por la liberalización del régimen, prometida ocho años atrás e interrumpida a mitad de camino. Mientras tanto, los conservadores presentaban una organización mayor, recursos derivados del control

de ciertas esferas del estado y los medios masivos de comunicación¹¹ y el decisivo respaldo clerical, que depuró la lista del millar de candidatos a ocho¹². A mitad de camino entre ambos sectores se situaba un viejo conocido del electorado, Rafsanjani, quien ahora ocupaba un lugar definido prácticamente por oposición. Mostraba ya desde hacía tiempo ciertas actitudes muy liberales, que complacían al establishment¹³, aunque al mismo tiempo permanecía fiel a su origen clerical, conservando un lugar en los estratégicos órganos religiosos. Los comicios estuvieron signados por clausuras de medios de comunicación, atentados y denuncias de fraude por parte de Karroubi¹⁴. Resultó electo sorpresivamente el alcalde de Teherán, empujado por el voto popular¹⁵ y por algunas maniobras del aparato dominado por la línea conservadora y clerical. También debemos destacar el aporte del presidente norteamericano, “quien promovió la participación en la elección cuando el canal estatal transmitió un discurso en el que manifestaba que la elección ignoraba los requerimientos básicos de una democracia” (WP 19/6/05).

Observando la procedencia de los candidatos¹⁶, resulta evidente que la presente elección representa un verdadero salto. Un hombre de niveles inter-

¹¹ “Los sectores más conservadores del régimen, liderados por Khomeini, controlan los medios de comunicación, los tribunales revolucionarios y las fuerzas de seguridad” (Bakeaz y El Correo, 18/9/99).

¹² Rezaee, conservador y miembro del Consejo de Guardianes, se retiró justo antes de las elecciones, pese a ser aprobado por el Consejo de Guardianes.

¹³ “Intentó aproximarse a Washington ofreciendo un contrato a la petrolera Conoco, que fue rechazado por el congreso norteamericano” (EP 17/6/05). Apodado “la eminencia gris”, es considerado uno de los hombres más ricos de Irán y el padre del programa nuclear.

¹⁴ “Inicialmente, el Ministerio del Interior (controlado por el reformismo) anunció a Rafsanjani en primer lugar, Karroubi en segundo y Ahmadinejad tercero. Media hora, después el Consejo de Guardianes anunció otro resultado” (NYT 19/6/05).

¹⁵ Ahmadinejad resultó electo alcalde de Teherán con una participación del 10% del electorado en el año 2003. De origen pobre, integró la Oficina para el Fortalecimiento de la Unidad entre Universidades y Seminarios Teológicos, organización que jugó un rol central en el asalto a la embajada norteamericana en Teherán. Luego integró los Guardianes de la Revolución. Caracterizado por una campaña y una vida austera (aún vive en una humilde casa en el sur de Teherán, donde se encuentran los barrios pobres), preocupa a los inversores “que especulan con un posible cierre de la bolsa, de acuerdo a sus diatribas contra la especulación” (IranNews 23/6/05).

¹⁶ Bagher Ghalibaf: ex jefe de policía; Larijani: miembro del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Rafsanjani: Presidente del Consejo de Guardianes; Karroubi: miembro del Consejo de Guardianes; Moeen: ex Ministro de Educación Superior y Mehralizadeh: Director de la Organización Nacional de Deportes.

⁹ El Consejo de Guardianes de la Constitución Islámica, que refrenda todas las leyes, siempre que sean conformes al Islam. El Consejo de Expertos que dirime las disputas entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes. Tribunales de Justicia regidos por la justicia canónica islámica. Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

¹⁰ En Irán se vota a partir de los 15 años, por dicha razón, la juventud constituye dos tercios del electorado.

medios del poder y de origen humilde, prácticamente de las bases originarias del movimiento que impulsó la Revolución Islámica a fines de los '70, pasó a ocupar el mayor cargo electivo en un delicado momento para el país, vista la magnitud de su contendiente de siempre.

Elecciones Presidenciales	2001		17 y 24 de junio 2005				
	Candidatos	%	1ª vuelta			2ª vuelta	
			Candidatos	Votos	%	Votos	%
Conservadores	Tavakoli	10,05	Ahmadinejad	5.710.354	12,22	17.284.782	36,76
	Shamkhani	1,81	Bagher Ghalibaf	4.075.189	8,71		
	Jasbi	0,6	Larijani	1.740.163	3,72		
	Ghafuri Fard	0,33					
	Razavi	0,27					
	Sadr	0,13					
	Fallahian	0,13					
	Total conservadores	13,32	Total conservadores	11.525.706	24,65		
Pragmáticos	Kashani	0,6	Rafsanjani	6.159.453	13,16	10.046.071	21,4
Reformistas	Khatami (reelección)	52,26	Karroubi	5.066.316	10,83		
	Taba	0,07	Moeen	4.054.304	8,66		
			Mehralizadeh	1.289.323	2,75		
	Total reformistas	52,33	Total reformistas	10.409.943	22,24		
Nulos y blancos		1,29		1.221.940	2,61	663.770	1,41
Votos emitidos		67		29.317.042	62,66	27.959.253	59,57
Abstenciones		33		17.469.376	37,34	18.977.165	40,43
Total		100		46.786.418	100	46.936.418	100

Fuente: IranNews, Tehran Times, BBC News, agencia de noticias IRNA.

América Latina

América Latina se debate entre los resultados macroeconómicos más importantes en los últimos años y los niveles de pobreza y desempleo más abultados de toda su historia. La realidad macroeconómica, con economías que reflejan un crecimiento de los Productos Brutos Internos —la riqueza producida socialmente—, no se acompaña con una mayor equidad en su reparto, aumentando la brecha entre ricos y pobres. El último informe del Centro de Estudios para América Latina (CEPAL) asegura que 96 millones de personas viven con menos de un dólar por día. Si a este número se le suma la cantidad de pobres, el número de personas con dificultades económicas graves trepa a 222 millones de personas (44% de la población latinoamericana).

La necesidad de competir (y sobrevivir) en la “guerra comercial”, que anunciara el ministro de Economía brasileño Antonio Palocci el mes pasado (véase *Análisis de Coyuntura* anterior), se refleja en la creciente necesidad de reconversión tecnológica para continuar en el sistema, el cual sólo puede reproducirse con la fabricación de mercancías en el menor tiempo

posible para acceder a los mercados locales, regionales e internacionales.

A partir de este círculo, la desigualdad y el hambre son el caldo de cultivo para las movilizaciones y descontentos sociales que ponen en jaque a la mayoría de los gobiernos de la región. Los que asumen deben, necesariamente, partir de atender —cómo mínimo— esas demandas que exigen los respectivos pueblos.

Los casos de corrupción en México, Chile y Brasil —siendo este último el que analizaremos aquí— reflejan la descomposición de una clase política que no está a la altura de las circunstancias y que, en algunos casos, sigue aliándose a espaldas a la sociedad con quienes ésta repudia. Ejemplo de ello es la concesión de inmunidad a las tropas norteamericanas en Paraguay.

Estas mismas circunstancias políticas y sociales llevan a cambios en las estrategias de las diferentes organizaciones sociales. Ejemplos de ello son los zapatistas en México, que asumen un nuevo rumbo en su lucha, y el nuevo capítulo que se abre en la prolongada pelea del pueblo boliviano.

Pelea por los mercados

Los duros intentos de Integración.

Integración financiera.

Cuando se trata de poner palos en la rueda a la avanzada norteamericana, los países del cono sur encuentran rápidos acuerdos que le permiten mantener, por ahora, cierto margen ante la primera potencia mundial. Los acuerdos del MERCOSUR, tienen ese sello, el de limar la pelea entre los países miembros y presentarse como un bloque hacia afuera.

Pero procesos de integración reales sólo pueden generarse a partir de privilegiar los intereses generales por sobre los particulares o “nacionales”, tarea que parece no estar al alcance de estos países. Ejemplo de ello son los intentos de creación de un banco sudamericano.

Gracias a la iniciativa de Chávez, en el intento de generar mecanismos que permitan fuentes de financiamientos por fuera de los organismos multilaterales de crédito (FMI, BID o Banco Mundial), se reunieron en Buenos Aires los ministros de hacienda de

Argentina (Roberto Lavagna), Brasil (Antonio Palocci) y Venezuela (Nelson Merentes).

La idea del banco regional para realizar obras de infraestructura —tal como tiene la Comunidad Andina de Naciones a través de la Corporación Andina de Fomento (CAF)— no dio los resultados esperados en las reuniones.

Tanto para el argentino como para el brasileño, crear una nueva entidad de cero sería un proceso engorroso y no conduciría a alivianar la delicada situación de los países firmantes: *“En estos momentos más que plantear la creación de nuevas estructuras se analizó el funcionamiento de las ya existentes y se hizo una mención específica sobre el rol muy positivo y creciente que la CAF ha venido jugando en los últimos tiempos”*, afirmó Lavagna (C 14/6). En cambio, propusieron solidificar una política en común ante los organismos multilaterales de crédito: *“se analizó alguna acción conjunta en el BM y el BID para que nuestros países tengan mayor peso y una voz y voto más fuerte que la que en este momento tienen”* sintetizó el ministro argentino (C 14/6).

Coyuntura política

OEA: otro fracaso en el intento de imponer la hegemonía norteamericana

Entre el 5 y 7 de junio en Fort Lauderdale, en el estado de Florida de EE.UU., se realizó la 35^a Asamblea General de la Organización de los Estados America-

nos (OEA). Otra vez, tal como había pasado dos meses atrás cuando se eligieron a las flamantes autoridades, EE.UU. sufrió un revés frente a un grupo heterogéneo pero decidido a que la cumbre americana de países no sea una administración más de Washington. El tópico a discutir tuvo que ver con las democracias

en el hemisferio y la elaboración de un documento que otorgue un poder especial al organismo para que garantice los “*mecanismos de defensa de la democracia*”, pudiendo revisar el funcionamiento de los gobiernos elegidos en las urnas. Las recientes crisis políticas de Bolivia, Ecuador y Haití fueron los insumos para que la cuestión de la democracia sea la agenda central.

El rechazo

EE.UU., a través de su presidente George Bush y de la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, hicieron una propuesta llamada “Carta Democrática”, en la que instan a los países americanos a que “*juntos tenemos que insistir con que los líderes elegidos democráticamente tienen que gobernar democráticamente. Y como dijo el Secretario General Insulza, los gobiernos que no logran cumplir con esta meta crucial deben rendir cuentas ante la OEA*” (C 6/6). La primera reacción adversa al discurso de Rice vino de Brasil. Su canciller, Celso Amorim, declaró: “*La democracia no puede ser impuesta. Nace del diálogo*”, y agregó: “*queremos fortalecer la democracia en la región, pero queremos evitar mecanismos de injerencia*” (FSP 6/6). Como cabía esperar, Venezuela fue quien salió al cruce directo contra EE.UU. Alí Rodríguez, el canciller venezolano, declaró: “*La OEA no está facultada para hacer evaluaciones sobre el estado de la democracia en los diferentes países. Ésta es una materia que compete de manera exclusiva e intransferible al pueblo, el único legitimado como soberano para evaluar y decidir sobre su sistema político y sobre su desempeño*”. Desde Caracas, el presidente de ese país, Hugo Chávez, sentenció al respecto: “*Si aquí hubiera que monitorear a algún gobierno de la OEA, sería al de los EE.UU., un gobierno que apoya terroristas, que invade pueblos, que atropella su propio pueblo, que pretende instalar una dictadura global*” (LN 6/6).

La acusación de intervencionista desplegada por Venezuela causó revuelo en la cumbre y muchos países —cada uno con sus respectivos matices— se subieron a ella. Brasil encabezó un acuerdo entre varios países para oponerse a la Carta presentada por Washington. México y Uruguay apoyaron rápidamente la iniciativa brasileña, como también Argentina, aunque este último en un tono más conciliador. A través de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración, un viejo organismo que nuclea a países de América Latina para establecer acuerdos regionales) y con el apoyo de países de la Caricom (Comunidad de Países del Caribe) lograron presentar un proyecto alternativo a la Carta Democrática de EE.UU., la cual solamente había recibido el apoyo oficial de Perú y Chile al momento de su presentación. El nuevo texto conciliador establecía lo siguiente en su borrador: “*Promover y consolidar la democracia participativa dentro del principio de no intervención y el derecho a la autodeterminación. Iniciar un proceso de reflexión dirigida a formas de coope-*

ración para prevenir y superar las crisis”. De este preproyecto, y a raíz de las mediaciones realizadas por el canciller argentino Rafael Bielsa para que la cumbre no sea un fracaso, salió una declaración que insta a ayudar a las democracias con problemas, pero sin una postura intervencionista tal como pretendía EE.UU., y pidiendo al presidente de la OEA “*que proponga formas de cooperación regional y eleve recomendaciones específicas para prestar asistencia a los estados miembros que la soliciten*”. Para ese entonces, “*la propuesta de EE.UU. había fracasado (...). La iniciativa que pretendía monitorear a las democracias americanas en peligro fue considerada demasiado intervencionista*” (LN 7/6).

Esta situación crítica de la 35^{va} Asamblea General tuvo repercusión en todo el mundo. Así, la BBC fue uno de los medios que mejor manifestó la situación: “*La posición latinoamericana reflejaba el hartazgo de la región con la actitud del gobierno estadounidense de pedir mucho y dar poco, y ser más propenso a la imposición que a la negociación*” (BBC 7/6).

Cumbre de Presidentes del MERCOSUR en Paraguay

Se realizó entre los días de 18 y 19 de junio la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR en Asunción, capital de Paraguay. La cumbre sirvió, entre otras cosas, para sacar a la luz las dificultades y asimetrías entre los países más postergados del bloque (Uruguay y Paraguay) con respecto a los principales socios (Argentina y Brasil). De esta manera, lo que se presagiaba como una cumbre bastante tensa, incluyendo declaraciones previas de ministros paraguayos anunciando el retiro de su país del MERCOSUR, terminó siendo un puente para bajar las tensiones entre los miembros, ya que tanto Argentina como Brasil terminaron cediendo a las demandas de los más pequeños. De esta manera, se conformó el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) destinado “*a financiar programas para promover la convergencia estructural; desarrollar la competitividad; promover la cohesión social, en particular de las economías menores y regiones menos desarrolladas, y apoyar el funcionamiento de la estructura institucional y el fortalecimiento del proceso de integración*”, tal como sugiere la declaración final del encuentro.

Este fondo, que será en un inicio de U\$S 100 millones, lo aportarán en su mayoría Brasil (70%) y Argentina (27%). El restante 3% lo aportarán Paraguay (1%) y Uruguay (2%). El dinero se destinará siguiendo los siguientes porcentajes: Paraguay recibirá el 48%, Uruguay 32%, Argentina y Brasil 10% cada uno.

Por su parte, el encuentro no sirvió para limar las asperezas entre Brasil y Argentina, ya que ni siquiera

hubo un encuentro donde se discutieran las dificultades en la integración económica entre estos países. Pero Uruguay, que recibió la presidencia *pro tempore* (por 6 meses) del MERCOSUR, afirmó que en su mandato se trataron todos los temas referidos a trabas en materia comercial dentro del bloque.

Brasil: sálvese quien pueda

En momentos en que el primer mandatario brasileño se plantea su camino hacia la reelección, una avalancha de problemas erosionan los cimientos de su gobernabilidad. Con un PBI creciendo a menor escala de lo esperado, reflejo de la caída de la producción industrial; el rechazo de los empleados públicos, en huelga por el magro aumento concedido por el gobierno (0,1%); el avance de la deforestación de la selva Amazónica, propiciada, en parte, por permisos ilegales que vendía un funcionario del Partido de los Trabajadores (PT); se desató el escándalo de corrupción más grave en lo que va del mandato de Lula.

El problema comenzó cuando la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) encontró pruebas de “irregularidades” que comprometen a las máximas autoridades de Correos y del Instituto de Reaseguro de Brasil (IRB). A la cabeza de esta organización se encontraría Roberto Jefferson, presidente de Partido Laborista Brasileño (PLB) aliado al PT en la coalición gubernamental.

Ni lento ni perezoso, el Presidente Lula apoyó la investigación de la CPI, descabezando a las cúpulas de los dos organismos estatales. Pero con esta acción no se detuvo el escándalo. Jefferson “prendió el ventilador” y acusó a Dalubio Soares, tesorero del PT, de pagar U\$S 12.500 a los parlamentarios que apoyan al gobierno en el Congreso. Lula sostuvo que “*el Congreso no puede estar sujeto a compra (de legisladores)*”, admitiendo que no es fácil acabar con la corrupción: “*Está incrustada muchas veces en el alma, en la conciencia del corrupto y en la impunidad que siempre tuvieron los corruptos en Brasil*” (C 8/6).

La realidad nos marca que el gobierno de Lula tiene la necesidad a “cualquier precio” de contar con legisladores de otro partido. El PT posee 91 diputados de 513 y 13 senadores de 81. La construcción de alianzas con otros partidos es una práctica generalizada desde el gobierno del ex Presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), ante la falta de mayoría propia en el Congreso. Según los analistas brasileños, la estrategia “petista” de ocupar espacios impidió a Lula dar cargos a sus “socios” de derecha, el Partido Progresista (PP), el Partido Liberal (PL) y al PLB.

Jefferson, en la ratificación de su denuncia, acusó a toda la cúpula del PT de pagar sobornos a todo el te-

jido legislativo que construyó Jose Dirceu, Jefe de Gabinete y figura central en la creación del PT. Ante las presiones en aumento, éste decidió renunciar. Por la defensa del funcionario se pronunció la Central Única de Trabajadores (CUT), que lo proclamó defensor de los movimientos sociales y atribuyó las denuncias a la avanzada de los sectores más reaccionarios que se perfilan para la disputa electoral en 18 meses

Cada cual atiende su juego.

Este hecho generó una fuerte crítica de la conducción del PT. Jose Genoio, presidente nacional del PT, denunciado por Jefferson, afirmó que las “*malas compañías son un problema del gobierno de Lula y no del PT*”. En la misma línea se pronunció Markus Sokol, de la dirección ejecutiva del Partido, diciendo: “*El gobierno está embarrando al partido (...). La crisis política la creó el gobierno no el PT (...). La gravedad de la crisis se debe a que se conjuga una crisis por denuncias de corrupción con un sentimiento de frustración popular*” (C 9/6).

¿Tiempos de cambio?

“*Me gustaría que aprovechemos este momento para hacer lo que tiene que hacerse en Brasil, porque tenemos que mostrar a la sociedad brasileña que es posible acabar con la corrupción*” (LN 14/6). Con estas palabras, Lula buscó cambiar la imagen de su gobierno y nombró en la jefatura de la Casa Civil a Dilma Rausseff, ex Ministra de Minas y Energía, que instrumentó el programa “Luz para Todos” (cuyo plan es llegar a 20 millones de personas que no poseen este recurso), ganándose el rencor de muchos empresarios que no le perdonan las modificaciones al Ente regulador energético, impulsando el abaratamiento de la tarifas. Siempre reivindicó con orgullo su pasado guerrillero en la Vanguardia Armada Revolucionaria (maoísta).

El ímpetu de la ministra la llevó, recién asumida, a enfrentarse con Antonio Palocci, el “intocable” Ministro de Hacienda, que aclaró que esta crisis política no producirá ningún cambio en el rumbo económico. Rousseff estimó que “*la agenda económica va a tener que ser menos árida, para ir mas allá de la estabilidad*” (LN 24/6). La voz de la ministra es expresión de un amplio sector del PT que quiere producir un cambio en las políticas de ajuste que mantiene Palocci.

Otro puntal de cambio para Lula es consolidar su relación en el Congreso y en el gabinete con el Partido del Movimiento Democrático Brasileiro (PMDB), que junto a lo que tiene el PT le garantizaría 200 diputados. Sin embargo, el titular del PMDB le confirmaba a Lula que no existía el clima para llevar al partido entero al gobierno, aunque sí un amplio apoyo en el Congreso.

Por si esto fuera poco, al final de esta edición, renunciaba también el Secretario General del PT, Silvio Pereira, acusado de corrupción, y temblaba el titular

del Banco Central Henrique Meirelles, investigado por evasión fiscal.

Seguridad

Inmunidad a las tropas norteamericanas en Paraguay

En el marco de los sucesivos traspies que sufrió la administración Bush en los intentos de aplicar su política económica en la región –sirva como ejemplo la reciente cumbre de la OEA mencionada más arriba–, logró que el parlamento paraguayo le conceda inmunidad a sus tropas.

El 26 de mayo, la Cámara de Senadores de la República del Paraguay dio sanción a una ley, cuyos contenidos y alcances despertaron una gran polémica en la opinión pública del país y preocupación en la región.

Aprobada sin previo conocimiento del conjunto de la ciudadanía, “entre gallos y media noche”, tal como denunciaron opositores, la ley ratifica el convenio suscripto, con anterioridad, entre el Poder Ejecutivo guaraní y la administración Bush. El mismo prevé la realización de trece ejercicios militares en forma conjunta entre miembros de ambas Fuerzas Armadas desde el 1 de junio de 2005 hasta septiembre de 2006, aunque el acuerdo tiene plena vigencia hasta el 31 diciembre del año venidero, con expresa posibilidad de prorrogarlo en el tiempo.

El gobierno de Nicanor Duarte Frutos se comprometió a conceder al personal civil y militar de EE.UU. permiso de libre tránsito y permanencia en Paraguay, autorización para operar en cualquier espacio del territorio y total inmunidad. De esta forma, el Estado paraguayo renuncia a su poder jurisdiccional para investigar cualquier tipo de delito que pudiere cometer la comitiva norteamericana y a demandar a su gobierno ante la Corte Penal Internacional, a la cual adhiere¹⁷. El acuerdo señala taxativamente que “el gobierno de la República del Paraguay y el de los Estados Unidos renuncian recíprocamente a cualquier reclamo que cualquiera de las partes pudiera tener contra la otra por daño personal, lesión o muerte de sus personales militares o civiles, o por el daño, pérdida, o destrucción de sus respectivas propiedades, resultante de las actividades a las que este acuerdo se aplica” (ABC 13/6).

El cuestionado convenio militar incluye, además, la cooperación del FBI en programas de control y de

combate al delito dentro de las fronteras paraguaya. Fundamentalmente, asistirán en la seguridad interna, investigando los resonantes secuestros extorsivos, en expansión durante los últimos meses¹⁸.

Partidos políticos opositores y organismos de derechos humanos de la región expresaron su repudio y rechazo a las medidas. Orlando Castillo, del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) declaró: “La ley aprobada le ofrece (a las tropas estadounidenses) todo el territorio nacional a su merced. EE.UU. tiene fuertes aspiraciones de convertir a Paraguay en una segunda Panamá para sus tropas y no está muy lejos de alcanzar su objetivo destinado a controlar el Cono Sur y extender la guerra de Colombia” (C 13/6). Así, existe el temor de la instauración de más bases militares –como la de Manta (Ecuador) y Guantánamo (Cuba).

Por su ubicación geográfica, Paraguay es un punto estratégico para los intereses de Washington en la región. Por un lado, forma parte de la triple frontera argentino-brasileño-paraguaya; en segundo lugar, tiene acceso a la cuenca de agua dulce más importante de América (el acuífero Guaraní); finalmente, su proximidad con Bolivia le permitiría un monitoreo más de cerca de la agitada situación de este país (ver conflicto social) y –llegado el caso– una rápida entrada al mismo: “Si bien la ayuda militar no sería muy significativa, se generan suspicacias ya que Paraguay tiene una situación geográfica, geoestratégica y geopolítica muy interesante para cualquier pretensión hemisférica” (LJdM).

Esta medida, adoptada por el Estado paraguayo, difiere de la de sus socios del MERCOSUR. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay rechazaron, a pesar de las presiones sufridas, conceder inmunidad a miembros del ejército norteamericano en sus territorios. El ministro de Defensa argentino, José Pampuro, expresó que no comparte la decisión adoptada por el vecino país y ratificó la posición argentina de no otorgar inmunidad y respaldar la Corte Penal Internacional. En el mismo sentido, Jorge Argüello, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores

¹⁷ EE.UU. viene ejerciendo una fuerte presión diplomática en el mundo, con el objetivo de que sus ciudadanos (civiles y militares) queden eximidos de la Corte Penal Internacional, encargada de juzgar crímenes de lesa humanidad y genocidio.

¹⁸ Uno de los secuestros más resonantes fue el de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, cuyo cadáver apareció el último 16 de febrero, después de estar 148 días desaparecida. El gobierno ha responsabilizado de este hecho a un grupo político de izquierda, liderado por Osmar Martínez, actualmente detenido, a quienes se le atribuyen asiduos contactos con las FARC. Sin embargo, hay muchos indicios que vinculan el secuestro y asesinato con mafias policiales locales (C 13/6).

de la Cámara de Diputados, admitió que la cuestión en torno de la CPI constituye “un punto de disenso con

las autoridades de EE.UU.”.

Conflicto social

Nueva estrategia política del EZLN

Luego de un comunicado firmado por el Subcomandante Marcos, en el que criticara a todo el arco político mexicano, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dio la máxima alerta a sus comunidades y autogobiernos y evacuó los puestos de avanzada. El motivo fue el llamado a una consulta interna de las comunidades chiapanecas sobre la estrategia a seguir de aquí en adelante. Esta retirada se realizó para evitar una contraofensiva del gobierno, tal como sucedió en diciembre de 1997, durante la presidencia de Salinas de Gortari. Dicha acción del ejército —conocida como la “Masacre de ACTEAL”— dejó más de 50 muertos en una comunidad del EZLN.

En el comunicado publicado con el nombre de “*La (imposible) ¿geometría? del poder en México*”, los zapatistas ven a la globalización neoliberal como “una auténtica guerra mundial, en todas partes y en todas formas”, que no sólo destruye las relaciones sociales sino que también mina “las bases materiales, económicas del Estado-Nación tradicional”, así como a la “clase política tradicional, a su constitución, a sus relaciones internas, a sus relaciones con el resto de la sociedad (no sólo con los dominados) y a sus relaciones con las clases políticas de otras naciones (las llamadas relaciones internacionales)” (LJdM 20/6).

A partir de esto, la carta de Marcos se encarga de atacar a los tres partidos tradicionales de la política mexicana. Al PRI (que gobernó por más de 70 años) lo acusa de formar parte de “la dirección de los cárteles del narcotráfico, del secuestro, de la prostitución, del tráfico de personas”. Según Marcos: “la violencia criminal que azota el país no es más que la lucha entre los cárteles por la candidatura presidencial del PRI”. Al PAN (actual partido gobernante) lo acusa de estar dirigido por organizaciones de ultraderecha y expresión del neoliberalismo y conservadurismo. Y, finalmente, al PRD —oposición con muchas posibilidades de ganar las elecciones de 2006 gracias al apoyo que recibiría el alcalde metropolitano Manuel López Obrador— lo califica como el partido de los “errores tácticos”: “El error táctico de la alianza con el narcotráfico en el DF. El error táctico de pedirle dinero a la gente mintiéndole al decir que es para ayudar, ‘bajo el agua’, a los zapatistas. El error táctico del cortejo vergonzante a los sectores más reaccionarios del clero”. El error de López Obrador, que convirtió “la movilización ciudadana contra el autoritarismo del desafuero en un acto de promoción personal y de destape electoral. El que no dijo, en la movilización contra el desafuero, la frase que realmente correspondía, a saber, ‘nin-

gún dirigente tiene derecho a encabezar un movimiento en torno a una causa justa para, a espaldas de la mayoría, sujetarlo a su proyecto personal de búsqueda del poder y negociarlo para eso”. Y la carta insiste en que, cuando se critica el proyecto de López Obrador, “no se trata de criticar un proyecto de izquierda, porque no lo es, así lo ha declarado y prometido López Obrador al Poder de más arriba. Él ha sido claro y sólo no lo ven quienes no quieren verlo (o no les conviene verlo) y se siguen esforzando por verlo y presentarlo como un hombre de izquierda (...). Es un proyecto, según él mismo lo definió, de centro” (LJdM 20/6).

Luego de esta carta se decretó, como decíamos más arriba, la Alerta Roja para la consulta interna, que llegó a la conclusión de dar nuevos pasos hacia “una nueva iniciativa política de carácter nacional e internacional” (LJdM 28/6), cuya propuesta se hizo pública bajo el nombre de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que se publicó en tres partes (de aquí en adelante SDSL).

En esta declaración, reconocen un estado de estancamiento de la lucha indígena si ésta sigue manteniéndose aislada de las demás luchas populares: “Según nuestro pensamiento y lo que vemos en nuestro corazón, hemos llegado a un punto en que no podemos ir más allá y, además, es posible que perdamos todo lo que tenemos, si nos quedamos como estamos y no hacemos nada más para avanzar. O sea que llegó la hora de arriesgarse otra vez y dar un paso peligroso pero que vale la pena. Porque tal vez unidos con otros sectores sociales que tienen las mismas carencias que nosotros, será posible conseguir lo que necesitamos y merecemos. Un nuevo paso adelante en la lucha indígena sólo es posible si el indígena se junta con obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados... o sea los trabajadores de la ciudad y el campo” (Primera parte de la SDSL). Pero “no sólo aparecen los trabajadores del campo y de la ciudad, sino que también aparecen otros y otras que mucho los persiguen y desprecian por lo mismo de que no se dejan dominar, como son las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los homosexuales, lesbianas, transexuales, los migrantes, y muchos otros grupos que de por sí hay en todo el mundo pero que no vemos hasta que gritan que ya basta de que los desprecien, y se levantan, y pues ya los vemos, y los oímos, y los aprendemos” (Segunda Parte de la SDSL).

En este llamado amplio de unidad tampoco descartan la posibilidad de un frente con los pequeños y medianos propietarios y comerciantes, arruinados por la competencia y la voracidad de los grupos más concentrados, beneficiados estos últimos por el “Tratado de Libre Comercio, que pasa a dejar en la miseria a muchos mexicanos, tanto campesinos y pequeños productores, porque son ‘comidos’ por las grandes empresas agroindustriales; tanto

como los obreros y pequeños empresarios porque no pueden competir con las grandes trasnacionales que se meten sin que nadie les diga nada y hasta les dan gracias, y ponen sus bajos salarios y sus altos precios. O sea que, como quien dice, algunas de las bases económicas de nuestro México, que eran el campo y la industria y el comercio nacionales, están bien destruidas y apenas quedan unos pocos escombros que seguro también van a vender” (Segunda parte de la SDSL).

Por lo tanto, el objetivo es formar un amplio frente de izquierda, excluyendo la pelea electoral, propiciando la discusión y debate de ideas (por lo menos en esta etapa que se abre): “*Vamos a ir a escuchar y hablar directamente, sin intermediarios ni mediaciones, con la gente sencilla y humilde del pueblo mexicano y, según lo que vamos escuchando y aprendiendo, vamos a ir construyendo, junto con esa gente que es como nosotros, humilde y sencilla, un programa nacional de lucha, pero un programa que sea claramente de izquierda, o sea anticapitalista o sea anti-neoliberal, o sea por la justicia, la democracia y la libertad para el pueblo mexicano (...). También avisamos que el EZLN establecerá una política de alianzas con organizaciones y movimientos no electorales que se definan, en teoría y práctica, como de izquierda, de acuerdo a las siguientes condiciones: No a hacer acuerdos arriba para imponer abajo, sino a hacer acuerdos para ir juntos a escuchar y a organizar la indignación; no a levantar movimientos que sean después negociados a espaldas de quienes los hacen, sino a tomar en cuenta siempre la opinión de quienes participan; no a buscar regalitos, posiciones, ventajas, puestos públicos, del Poder o de quien aspira a él, sino a ir más lejos de los calendarios electorales; no a tratar de resolver desde arriba los problemas de nuestra Nación, sino a construir desde abajo y por abajo una alternativa a la destrucción neoliberal, una alternativa de izquierda para México*” (Tercera Parte de SDSL)

Esta unidad se debe plasmar en un cambio y reforma de la constitución mexicana: “*La Constitución ya está toda manoseada y cambiada. Ya no es la que tenía los derechos y las libertades del pueblo trabajador, sino que ahora están los derechos y las libertades de los neoliberales para tener sus grandes ganancias. Y los jueces están para servir a esos neoliberales, porque siempre dan su palabra a favor de ellos, y a los que no son ricos pues les tocan las injusticias, las cárceles, los cementerios*” (Segunda Parte de SDSL). Y agregan que lucha es por una “*nueva Constitución o sea nuevas leyes que tomen en cuenta las demandas del pueblo mexicano como son: techo, tierra, trabajo, alimento, salud, educación, información, cultura, independencia, democracia, justicia, libertad y paz. Una nueva Constitución que reconozca los derechos y libertades del pueblo, y defienda al débil frente al poderoso*” (Tercera Parte de SDSL). En síntesis: “*Vamos con otra política, por un programa de izquierda y por una nueva constitución*”.

Bolivia : entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que tarda en nacer

En el análisis anterior describíamos la polarización al interior de la sociedad boliviana. Esto produjo una nueva renuncia del Presidente Carlos Mesa. Éste, en una última acción desesperada, intentó –por decreto– convocar a una Asamblea Constituyente, que reconstruya las perimidas instituciones bolivianas. En la misma elección de Constituyentes –histórica demanda de Occidente–, Mesa pretendía resolver la convocatoria al Referéndum por las autonomías –reclamo de Oriente.

Esta polarización regional se expresa en la conformación de fuerzas legislativas, donde se evidencia la subordinación de los partidos al peso de las necesidades regionales (*Análisis N° 60*). Igualmente, este intento de elección no consiguió sesionar por el fuerte bloqueo a la sede del Congreso (una semana cerrado) ejercido por comerciantes, campesinos, mineros, maestros, cocalleros y desocupados.

En sus últimos días, Mesa caracterizó la situación de “*peligroso empantanamiento*”, llamando a la Confederación Episcopal Boliviana a intervenir. Pero la misma no logró que se levantara las medidas de presión. En medio de negociaciones, Roberto de Cruz, de la Confederación Obrera Regional del Alto (COR), convocó a reservistas de entre 15 y 30 años a defender la patria, en el contexto de las agresiones que sufrieron indígenas Aymaras del Movimiento al Socialismo (MAS) por miembros de la Unión Juvenil Cruceña (UJC, grupos con entrenamiento militar, de clara orientación fascista). A la misiva de De la Cruz le siguió el llamado del Comité Cívico Cruceño a responder con la vida las provocaciones de El Alto.

En un clima discursivo de “*guerra civil*”, el primer mandatario anunció: “*Hasta aquí puedo llegar (...). Quiere dar a los bolivianos mis disculpas si no he sido capaz de conducir adecuadamente el país (...). Bolivia se acerca a un punto donde nadie está dispuesto a escuchar al otro (...). Unos pocos imponen sus ideas a la mayoría*”. Y aseguraba que “*su policía y sus fuerzas armadas*” fueron quienes mejor comprendieron la crisis (C 7/6).

Todos en lucha

Signo de demostración de la tensión existente en Bolivia fue el hecho de que, una vez presentada la renuncia de Mesa, el congreso no podía tratarla por una masiva demostración de fuerza que bajó desde El Alto, convocada por la COR y las Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de esa ciudad. Mientras, en el resto del Altiplano, la situación era como sigue: 78 cortes de ruta, distribuidos en todos los departamentos; la Planta de Semkata –que distribuye gasolina y gas licuado a las mayores concentraciones urbanas:

La Paz y El Alto— se encontraba tomada por manifestantes; un atentado contra Aguas de Illinami (en conflicto con los vecinos de El Alto) provocaba escasez de agua; y el paro de recolectores de residuos empeoraba las ya magras condiciones de salubridad. Este mapa planteó a la fragmentada y dispersa oposición (Fejuve, COR, COB, MAS y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia -CSUTCB), con mínimos acuerdos base, la necesidad de transformar las relaciones políticas del hacer boliviano y plasmarlas en una Nueva Constitución.

Esta fuerza, en construcción, es resistida por las fracciones regionales de los partidos tradicionales, que intentan reconstruir la mega-coalición (Movimiento de Izquierda Revolucionario, Movimiento Nacional Revolucionario y la Nueva Fuerza Revolucionaria) con la que gobernaron las últimas décadas.

Contra los que no aprenden.

Estos tres partidos, sin legitimidad electoral (*ver Análisis N° 55*) pero con 100 bancas de las 157 del Congreso boliviano, intentaron sesionar con el fin de seguir la línea sucesoria y convertir al Presidente del Senado, Hormando Vaca Diez (MIR), en Primer Mandatario. Las voces en contra fueron varias y diversas. El saliente Mesa dijo: *“Hormando, te lo digo como persona, como amigo. Quiero pedirte un gesto de desprendimiento que está en tus manos. Es una exhortación que tiene que ver con un presidente que está en una plaza cercada. Que se va, que no tiene ningún interés político. (...) La única salida es el proceso electoral inmediato y completo”* (LN 8/6). En la misma línea y criticando la decisión de sesionar en la Casa de la Libertad (en Sucre), para evitar movilizaciones, Evo Morales (MAS) evaluó: *“Con esta decisión, Vaca Diez está incendiando el país. Nadie permitirá que sea presidente. Le pido que reflexione y cambie la sesión a La Paz y renuncie a la sucesión”* (LTC 7/6).

En ese mismo momento, El Alto, en estado de Asamblea Popular permanente, habló de autogobierno, desconociendo la autoridad nacional, mientras la COR alteña proclamaba a esa ciudad como “cuartel general y bastión de la revolución boliviana”. También se pronunció Felipe Quispe (CSUTCB), con su llamado a tomar las armas de los cuarteles para estar pertrechados para la guerra civil, que caracterizó como el mejor escenario posible.

Finalmente, reunidos en Sucre, los 157 legisladores lograron aprobar la renuncia de Mesa, pero a la hora de aprobar la línea sucesoria la sesión fue suspendida por el avance multitudinario de quienes rodeaban el palacio histórico, tras enterarse del asesinato de Carlos Caromayta (presidente de una cooperativa minera) bajo el fuego del grupo Dálmata de la Policía Militar. Inmediatamente, el NFR retiró su apoyo a Vaca, quien huyó para después refugiarse en un cuartel.

Cabe mencionar que por esas horas el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Luis Alberto Granados, aconsejó “escuchar la voz del pueblo”

Lo que viene.

Al final de la jornada, tanto Vaca Diez como Mario Cossío —titular de la Cámara de Diputados por el MNR—, renunciaron a sus posibilidades de ser prescindibles, acusando a Carlos Mesa y a Evo Morales de acordar el envío de manifestantes para lincharlos. De esta manera, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Rodríguez, asumió la presidencia solicitando una tregua a los legisladores y a los movimientos sociales. De los reclamos más candentes opinó: *“Asamblea Constituyente, Autonomías Regionales, Política Hidrocarburífera, son temas insoslayables en la gestión de transición”* (LTC 10/6).

Comprendiendo la falta de poder real para responder a estas demandas, el MAS llamó a un cuarto intermedio en la movilización, respondiendo al llamado de “tregua social”. Muy por el contrario, El Alto (Fejuve y COR) anunció: *“¡Nosotros no hemos luchado por un cambio de presidente! Peleamos por la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Así que como no pudimos conseguirla, las medidas de lucha continúan”* (C 11/6). Inmediatamente después de este pronunciamiento, el flamante presidente invitó a los dirigentes sindicales y sociales a discutir sus demandas. En reunión con Abel Mamani, líder alteño, Rodríguez reafirmó su convicción de que es el sistema político renovado quien debe atender la agenda social.

Otro frente que no descansa es el Comité Cívico Cruceño, que emitió un comunicado donde afirma sentirse decepcionado, ya que no se ha respetado la sucesión presidencial como marca la constitución e inmediatamente puso en funciones a un Comité Electoral paralelo encargado de organizar un referéndum sobre autonomías regionales para el 12 de agosto.

Al cierre de esta edición, Bolivia se sumergía en cierto clima de optimismo, luego de que el MAS abrió el camino para una solución a la crisis, al apoyar un llamado a comicios generales para diciembre de este año y al aceptar postergar para el año entrante la Asamblea Constituyente, el Referéndum Autonomico y la nacionalización de hidrocarburos. Todo esto debe ser ratificado por el Congreso, a quien el movimiento en lucha tilda de “usina de todos los males”.

Argentina

Junio cerró con un renovado lanzamiento de presiones y exigencias desde los centros financieros. Mientras el gobierno pretende cerrar un acuerdo “blando” con el Fondo Monetario (que sólo refinance los vencimientos de este año), el organismo no sólo insiste en la aplicación de reformas estructurales, sino que ahora cuestiona abiertamente la política cambiaria oficial, base del esquema económico.

A nivel interno, varias medidas gubernamentales provocaron la crítica de alguna fracción de la burguesía local. El control de capitales sancionado y el trabado desacuerdo con las empresas privatizadas provocan la desconfianza en la fracción más concentrada del capital, quien denuncia (en sintonía con los organismos internacionales de crédito) la

inexistencia de un plan económico de mediano plazo en la Argentina.

Como telón de fondo, mientras se reacomoda mínimamente el precio de la fuerza de trabajo (salario), se consolida un esquema de distribución más desigual.

Respecto de la coyuntura política del mes de junio, las idas y venidas en el armado de las listas de cara a los comicios de octubre se llevan la mayor parte de las miradas. Así, veremos cómo en todos los sectores, oficialistas y de oposición, la toma de decisión sobre candidatos y alianzas electorales les resulta un dolor de cabeza imposible de evitar si no se quiere perder espacios de poder, así como un desgaste en cuanto a la imagen que el conjunto de la sociedad percibe de la lucha facciosa que esto implica.

Pelea por las ganancias

El sinuoso tránsito hacia el acuerdo “mínimo”

Considerando la reestructuración post default —que significó un recorte del 65% en los bonos y títulos públicos de los acreedores privados—, la deuda total del Estado argentino se ubica en los 126.567 millones de dólares. Si se suman los 24.000 millones que no se presentaron al canje, la suma supera los 150.000 millones de dólares. Semejante *pasivo* (que equivale, aproximadamente, a tres PBI anuales) impone al gobierno la necesidad de reprogramar los pagos estipulados con los organismos multilaterales de crédito, a fuerza de no caer en *cesación de pagos* con ellos. Modestamente, el equipo de Economía ambiciona, al menos, la firma de un acuerdo “blando” con el FMI, que sólo refinance los 3.651 millones de dólares que vencen este año con el propio Fondo, con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo, sin que signifique la entrada de dinero fresco en calidad de “nuevo préstamo”.

Pero las reprogramaciones nunca son “gratuitas”. Los centros de capital financiero aprovechan la instancia de negociación para ejercer toda la presión posible en función de la aplicación de medidas profundas, que garanticen la realización de sus intereses. Así, a principios de junio, el ex subsecretario del Tesoro de EE.UU., John Taylor, salió a “marcar la cancha” recomendando los siguientes pasos a seguir por el gobierno, como condición necesaria para la ejecución de la “ayuda económica” requerida: *“Es muy importante que Argentina mejore el clima de negocios [...]. Argentina tiene que crear un am-*

biente más atractivo para las inversiones. Los servicios públicos y sus ganancias son dos temas que afectan. Sería importante hacer ajustes de precios y tarifas para poder recuperar la inversión en esos sectores”. Acto seguido, retomó otro de los caballos de batalla del capital financiero: *“Argentina tiene que buscarles una solución definitiva a los bonistas que no ingresaron al canje”*. Finalmente, el planteo de Taylor incluyó un requisito profundamente estratégico a escala regional: *“Es muy importante que Argentina y EE.UU. trabajen juntos en muchos problemas. Por ejemplo, en el problema de Haití y ahora en el de Bolivia”* (C 1/6).

Pocos días después, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, delimitó el terreno advirtiendo que *“Si no hay consenso para un programa que contemple el crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de la pobreza, no hay interés en llegar a un acuerdo”* (LN 3/6).

Más tarde, el Fondo Monetario subrayaría, en un documento interno, lo que muchos popes del capital nacional vienen pregonando: la economía argentina se caracteriza por *“la ausencia”* de un verdadero plan económico. En dicho documento pudo leerse también una crítica directa al presidente Néstor Kirchner, quien con el objeto de *“aumentar sus niveles de popularidad [...] afecta el clima de inversión y los proyectos de crecimiento”* en el país (C 20/6).

Hasta aquí, en el plano de la generalidad, las críticas y presiones del Fondo y EE.UU. se han movido entre la calificación negativa de “populismo”, por un lado, y la falta de un “plan” o garantías favorables a la reproducción del capital más concentrado del mundo, por el otro. En términos más concretos, lo que los centros del capital financiero

y sus gobiernos nacionales, organizados en el Grupo de los 7, exigen a la Argentina es: el mayor grado de libertad de movimiento de las empresas de servicios públicos, tanto en materia tarifaria como en materia de inversiones (extensión y mejora de los servicios); un mayor nivel de superávit fiscal, que llegue al 4,5% y garantice los futuros pagos de deuda; un nuevo régimen de coparticipación de impuestos -que contiene implícitamente el ajuste en el gasto público provincial-; una reforma financiera que reduzca la participación de la banca pública (privatización mediante de ésta) y la desprotección y sucesivo “quiebre” de la banca nacional menos concentrada.

Con todo, al decir de algunos analistas, una de las *claves* de la presión del Fondo observada en junio tiene que ver con la desaprobación puntual de medidas económicas consideradas clave por el gobierno de Kirchner. Según Marcelo Bonelli, “*El Fondo Monetario hace una ofensiva profunda contra la estrategia cambiaria*” (C 26/6), llamando a dejar el dólar libre y revaluar el peso argentino.

El clima de tensión se profundizó en los últimos días del mes. Los específicos ataques del Fondo subieron de tono mientras que, a menos de cuatro meses de las elecciones “plebiscitarias” de Kirchner, desde el gobierno se avanzó en la aplicación de medidas concretas, si no opuestas, al menos distintas a la línea exigida por los organismos financieros internacionales.

Control de capitales, intervención y desacuerdos con las privatizadas

Es sabido que uno de los pilares del esquema económico del gobierno consiste en mantener un dólar equivalente a tres pesos, propulsor de la venta hacia el exterior de bienes primarios e industriales producidos en el país (cuyo costo de mano de obra se reduce en términos internacionales, al ser pagados en pesos devaluados) y motivo del superávit fiscal, gracias a la aplicación de retenciones a las exportaciones. Es por esto que el Banco Central (BCRA) no ha dejado de intervenir en el mercado cambiario, comprando día a día centenas de millones de dólares que ingresan a la Argentina, y lanzando al mercado sumas equivalentes en pesos. La compra oficial y sistemática de divisas, y la consecuente emisión de moneda nacional, fue complementada el mes pasado por un conjunto de medidas puntuales y de transición. Por un lado, el BCRA extendió de 90 a 120 días el plazo para que los exportadores liquiden las divisas que reciben en el mercado internacional, retrasando así el cotidiano aluvión de dólares; por otro lado, autorizó a los

bancos a tener el 15% de su patrimonio en dólares (mayor al 10% permitido hasta ahora).

Pero la resolución que causó mayor revuelo, indudablemente, estuvo vinculada al *control de los capitales externos* denominados “golondrina”. Se trata de una **restricción** aplicada a todo ingreso de divisas que no se dirijan a la producción o a la compra de bonos en una emisión “primaria”. La medida básicamente obliga a todos los capitales a permanecer en el país por 365 días, y además, como garantía de permanencia, inmoviliza el 30% del dinero ingresado, en una cuenta bancaria (por el que no recibe ningún tipo de interés).

La tribuna privilegiada desde donde se lanzó la primera voz disidente fue el diario La Nación. En un editorial se criticó fuertemente la medida, contrastándola con la “alarmante situación” de carencia de inversiones privadas: “*Si el gobierno nacional se muestra más preocupado por mantener a cualquier costo el nivel actual del dólar y por frenar el ingreso de capitales golondrinas que por incentivar las inversiones privadas, difícilmente se superarán los escollos que soporta la economía argentina*”. La sintonía con el FMI al cuestionar la necesidad de sostener obstinadamente el actual valor del dólar, se esclarece aún más en el último párrafo del editor: “*Hoy más que nunca el Gobierno debería exponer un programa de mediano y largo plazo, que incluya reformas de fondo y que despeje el panorama de las incertidumbres que comienzan a observarse*” (LN 18/6).

Uno de los puntos centrales, hemos visto ya, incluido en el reclamo general de “reforma profunda” y “programa de mediano plazo”, lanzado por los centros financieros internacionales y por la línea ortodoxa liberal del capital más concentrado a escala nacional – cuya tribuna predilecta es La Nación – es la renegociación de los contratos con las compañías de servicios privatizados. La necesaria libertad de movimiento que dichos capitales buscan en países como la Argentina (fuertemente inestables, pero sumamente rentables al corto plazo dados el grado de corrupción y la falta de mecanismos de control reales sobre el comportamiento de los capitales) ha estado chocando con los desigños de los capitales que históricamente producen en el país. Estos requieren que el manejo absolutamente discrecional de las tarifas y de las inversiones en infraestructura energética, ejecutado por las privatizadas hasta el estallido de la crisis en diciembre de 2001, se revierta mediante un mínimo control que garantice la distribución necesaria de recursos a un costo “razonable”. Todo el capital local, excepto la pequeña burguesía, adhiere a un “ajuste hacia arriba” de las tarifas, mientras el mismo no supere determinada tasa, y destierre, por

unos cuantos años, el problema de la falta de recursos energéticos al interior de las fronteras nacionales.

En este sentido, el gobierno ha jugado un papel sumamente cauteloso. Ha influido por cierto, en un grado para nada menor, el nivel del conflicto social en general y el descontento de la población respecto de las empresas privatizadas en particular. Por todo esto, a tres años y medio de la devaluación, la porción más sustanciosa de los contratos con las privatizadas sigue sin ajustes ni reacomodamientos. De todas maneras, en junio asistimos a dos acuerdos puntuales. Primero, se convalidó la dolarización de las tarifas de las terminales portuarias y la suba (por un 15%) en el precio de los peajes (C 10/6). Más tarde, se acordó con dos transportadoras de energía eléctrica (Edesur y Edelap) un ajuste aplicable a comercios e industrias. Si bien este último retoque tarifario no afecta a las casas de familia, permite a las compañías indexar las tarifas cada seis meses, en el caso de que una variación en los costos así lo requiera (C 18/6).

No obstante, los pesos más pesados en la línea de las privatizadas (las productoras de energía, comunicaciones y recursos vitales como el agua) aún no han podido avanzar un ápice en lo que a redefinición de nuevos contratos con el gobierno nacional respecta.

El largo proceso de reacomodo salarial

La lucha por el salario.

Otro de los puntos más sensibles en el esquema general de la política económica, y que mayor ruido ha causado, es la lucha en torno al salario. Los sostenidos paros, las movilizaciones y, el mes pasado, el “novedoso” corte de ruta, llevados a cabo por los trabajadores ocupados (privados y estatales) fundamentalmente en la búsqueda de una mejora salarial, han colocado la problemática por la distribución de la riqueza socialmente producida como uno de los primeros puntos del “orden del día”. Algunas protestas se desarrollaron fuera (y en contra) de la dirección sindical formal, otras directamente conducidas por ésta; pero lo cierto es que han removido el avispero del gobierno y, fundamentalmente, de la burguesía con negocios en el país.

Por un lado, el gobierno anunció una nueva suba aplicada al salario mínimo. Ésta consistió en la incorporación al salario de los aumentos previos “no remunerativos” (no calculados en los aportes, las vacaciones, las horas extras, ni en el aguinaldo). De esta manera el sueldo mínimo llegó a los 630 pesos (C 2/6), como parte del proceso de recomposición salarial, tras la profunda

salarial, tras la profunda devaluación aplicada a comienzos de 2002.

En este contexto, los casos particulares más sonados de aumento salarial acordado entre el capital y el trabajo fueron, el mes pasado, los de las automotrices y los del comercio. El sindicato de mecánicos de la industria automotriz, SMATA, paró la producción, realizó cortes de ruta y cerró, luego, con Ford, Volkswagen y Daimler Chrysler, una suba de sueldos escalonada (C 16/6). Los trabajadores de comercio recibieron un aumento del 18%, ejecutable en dos etapas, tras la negociación también cupular entre la Cámara Argentina de Comercio y la Federación de Empleados de Comercio (C 18/6).

Pero tras las firmas llegaron las impugnaciones y amenazas monocordes por parte del capital más concentrado. En la ciudad de Rosario, el precolquio organizado por IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) fue la tribuna perfecta en donde varios se anotaron para advertir la latente situación inflacionaria provocada por la suba en el “costo de mano de obra” y su consecuente descarga en los precios finales. El titular de la Cámara de Supermercados, Fabio Fabri, dijo que su sector “*está haciendo un esfuerzo enorme para mantener los precios estables y no se puede hacer todo al mismo tiempo*” (C 17/6). Alfredo Coto sostuvo, respecto del aumento, que “*hay que hacerlo con cuidado, porque puede generar aumento de precios. Ya sabemos lo que viene, porque ya lo vivimos. Los sueldos deben subir si la economía crece. Calma, cuidado con ese protagonismo que busca el sindicalismo. Por una competencia sindical podemos generar una guerra que puede desestabilizar la economía*” (LN 17/6). El director de IDEA, Enrique Pescarmona, sintetizó la línea del capital en la vieja antinomia productividad/salario: los aumentos, dijo, “*no están de acuerdo con la productividad. A los empresarios nos interesa tener salarios altos, pero ojo, porque la inflación genera pobreza. Estamos muy preocupados*” (LN 17/6). Desde las alimenticias, Pablo Devoto, directivo de Nestlé, sostuvo: “*Hay un desfase por el lado de los costos empresarios en relación a los salarios y tarde o temprano podrían ir a los precios*”; mientras su colega de Molinos, Juan Manuel Forn, insistía en que “*Nadie discute que el salario real debe recuperarse pero hay un problema de velocidad con que se aplican esos ajustes porque, sino, se los devora la inflación y a esa película la conocemos todos*”. Por último, inmediatamente después de haber firmado los convenios referidos más arriba, en las automotrices compartieron la misma línea de amenaza. A Ted Cannis, por entonces presidente de Ford, se le oyó decir: “*Los precios [...] van a seguir subiendo, necesariamente, tras este incremento de nuestros cos-*

tos”; mientras el director comercial de Volkswagen, José Demarco, coincidía: “*Si los costos suben, los trasladaremos al público*” (C 17/6).

Un día después, la CAME, nucleamiento de la pequeña industria y comercio, la CGT, en la voz de Hugo Moyano, y el propio Presidente de la Nación respondieron a todo el bloque de capital concentrado. Néstor Kirchner fue el primero en poner “blanco sobre negro” replicando a los empresarios un cortante: “*Por favor, no nos extorsionen más*”. “*En el congreso de IDEA decían que si hay aumentos de salarios, éstos van a repercutir en los precios y va a haber inflación, extorsionando al pueblo y a los trabajadores de una forma realmente inaceptable*” (LN 18/6). De manera más significativa, una semana antes, Kirchner había intervenido en el marco de las movilizaciones y las huelgas: “*¿Qué quieren? ¿Un pueblo apagado, sin esperanza? Es justo que el trabajador participe más en la distribución de la riqueza argentina; es justo y totalmente absoluto, razonable y responsable*” (LN 10/6).

Oswaldo Cornide, de CAME, defendió una nueva pauta de distribución, dado el carácter mercadointernista del capital pequeño que representa: “*compartimos la opinión del presidente acerca de que el aumento salarial no genera inflación*”. Finalmente, Hugo Moyano repitió las palabras presidenciales, calificando las intervenciones del capital en IDEA como “*una extorsión no sólo a los trabajadores y al gobierno, sino al pueblo en general*” (C18/6).

La consolidación de un esquema de distribución cada vez menos justo.

En la alocución recién citada, Kirchner proponía como línea de acción: “*tenemos que ir superando la brecha de la distribución del ingreso*” (LN 18/6). En este mismo sentido, en lo que va de 2005, el Ministerio de Trabajo homologó más de 140 convenios entre sindicatos y empresarios. Si bien la mayor parte fueron acuerdos a nivel de empresa (tal y como lo propone la ley de flexibilización laboral), a partir de abril se realizaron convenios por actividad. Entre estos últimos, los más significativos incluyen a la construcción, metalúrgicos, alimentación, choferes (transporte de media y larga distancia), bancarios, tintoreros, vidrio y trabajadores de comercio.

Esto quiere decir que, a tres años y medio de la devaluación, todavía continúa el proceso “natural”

de recomposición salarial. De manera también “natural” todo el arco de la burguesía, excepto la exclusivamente mercadointernista (tal es el caso del pequeño capital organizado en CAME), polariza la posición, oponiéndose sin concesiones retóricas a todo reajuste hacia arriba en la variable *salario*. La dureza verbal contiene la demarcación del terreno en donde se juega la negociación.

Pero lo cierto es que este “ponerse al día” de los trabajadores en materia de distribución de la riqueza producida por ellos mismos, supone una tendencia más profunda de desigualdad, que a **escala mundial determina** los repartos mínimos del marco nacional. Nos es sumamente fácil ejemplificar esto que hemos afirmado.

Por un lado, y tras varios ajustes hacia arriba de los sueldos, el costo laboral industrial “*está un 30% más bajo que el que existía a fines de 2001*” (C 17/6) según datos del último trimestre de 2004. Hemos repetido hasta el hartazgo que no se ha equiparado aún el desfasaje entre aumento de precios al consumidor (inflación) y aumento salarial.

Pero por otro lado, lo que permanece “intocado” y en perspectiva de crecimiento es la situación laboral precaria, “en negro”. La sustancia de esta capa del trabajo es la desprotección legal total, la pauperización (los salarios son, en promedio, un 65% menores que los de los trabajadores registrados) y, vinculado a ambos elementos, la exclusión de cualquier tipo de reclamo (y mejora) salarial y de condiciones de trabajo. Así, el 47,5% de los trabajadores asalariados (4,7 millones de personas) permanecen en situación de ilegalidad o “en negro”.

Cabe, por último, observar la tendencia en el mediano plazo. En 1998 el trabajo no registrado (precario) marcaba 10 puntos menos que el nivel actual, es decir cerca del 37%. En sólo seis años y medio, la curva ascendente no observó ningún cambio de dirección significativo.

El empeoramiento de las condiciones laborales, sumadas a un contexto de alta desocupación (irreductible), contribuye a la tendencia general de desigualdad en la distribución de la riqueza. Tendencia general que, no obstante las subas salariales puntuales y generales, no ha sido revertida.

Coyuntura política

Elecciones de octubre: el desconcierto de las internas

Las próximas elecciones legislativas a realizarse en octubre, siguen siendo el centro alrededor del cual gira la coyuntura política nacional. La envergadura

que los próximos comicios van tomando a medida que se acerca la fecha, crece con el paso de los días en la misma medida en que lo hace el desconcierto en todos los espacios políticos que presentarán candidatos.

Nos encontramos en las horas decisivas del armado de las listas, y por lo tanto la puja facciosa cobra cada día más vuelo. Ningún espacio se salva de esta regla. Luego de la crisis política que estallara en el año 2001, con la abstención y el voto en blanco superando cualquier opción positiva, tendencia que no logró revertirse desde entonces, como hemos analizado en varias oportunidades, los partidos políticos tradicionales estallaron. Y las consecuencias de ello se hacen visibles en estos días de definición en torno a candidaturas.

PJ y Frente Para la Victoria, sin acuerdo en la provincia de Buenos Aires

Quizá la estructura partidaria que pareció quedar mejor conformada tras la explosión de 2001 fue el PJ, gracias a la fuerza centrífuga ejercida por el aparato bonaerense comandado por el ex presidente Eduardo Duhalde. Sin embargo, un trabajo de “hormiga” conducido por el presidente Néstor Kirchner, fue limando las patas de ese entramado de poder construido durante décadas, logrando partir al PJ (nuevamente) en dos. Los había unido el enemigo político común llamado Carlos Menem. Pero ahora se trata de la disputa al interior del reconquistado PJ entre ambos espacios de dicha alianza. Las negociaciones fueron arduas, casi caricaturescas por momentos. Con lanzamientos de campaña extra-oficiales, desmentidas, enojos, discusiones, desplantes, y todos los condimentos habidos y por haber en la lucha facciosa partidaria. Sin embargo, al menos al cierre de esta edición, como decíamos, el PJ volvió a partirse en dos. Por un lado, Duhalde impulsará la candidatura de su esposa, “Chiche”, como primer candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, con José María Díaz Bancalari como compañero de fórmula, por la lista oficial del PJ. Por otro lado, Kirchner impulsará a su cónyuge, Cristina Fernández, para el mismo cargo, pero en la lista Frente para la Victoria, en alianza con los sectores que responden al gobernador Felipe Solá, y a diferentes partidos vecinalistas y organizaciones sociales, como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) de Luis D’Elía y la organización territorial Barrios de Pie, conducida por Jorge Ceballos.

En la provincia de Buenos Aires se renovarán en octubre 3 senadores, y 35 diputados nacionales; 23 senadores y 46 diputados provinciales; 1030 concejales y miles de consejeros escolares. El arduo armado de las listas, responde a la difícil tarea de expresar, en candidaturas, la construcción de relaciones de fuerza realizada durante años por cada partido u organización.

El ARI “renovado” lleno de radicales, y el radicalismo cada vez más vacío

Sin embargo, esta disputa facciosa no es exclusiva del PJ ni mucho menos. Por el lado del ARI, su máxima dirigente y fundadora, Elisa Carrió, había planteado hace tiempo que su partido no se presentaría en alianzas en estos comicios. Sin embargo, luego de varios desmembramientos internos, el armado de listas también resultó para esta nueva fuerza un fastidio. Y lejos estuvo, además, de alejarse de “la vieja política”, como Carrió llama a todo lo que no sea su propio espacio.

Los ánimos ya venían caldeados, impulsados por el ARI de Córdoba, donde los máximos dirigentes han pedido la disolución del partido, y actualmente se encuentra intervenido por la justicia (LN 3/7).

A esto se sumó, hacia el final del mes de junio, el anuncio de Carrió de que el ARI contará con el ex jefe de gobierno porteño y dirigente delarruista, Enrique Olivera, como primer candidato a legislador por Buenos Aires. Junto con Olivera llegan otros radicales, como el legislador Fernando Cantero, Teresa de Anchorena, y el ex titular de la Juventud Radical, Alejandro Rabinovich. Vemos así lo difícil que le resulta a Carrió despegar de su pasado radical, con los problemas que esto le trae a la hora de sumar votos. Recordemos que tras la última experiencia en la conducción nacional con Fernando De la Rúa como presidente, la UCR quedó diezmada, en votos, en militantes y en discusiones intestinas, que aún hoy no han sido superadas y que prometen hacer repetir a este partido centenario una magra elección. Pero volvamos al ARI. Hablábamos de la difícil tarea de armar listas, y de tener que incluir en ellas a varios dirigentes radicales, con su desprestigio partidario a cuestas. La propia Carrió se sinceraba al respecto: “*Parece una lista de la UCR*” (LN 1/7). Y también el flamante candidato Olivera señalaba: “*tenemos coincidencias programáticas profundas en todos los temas. Su origen y convicciones radicales son similares a las mías [...]. Yo siempre dije que había más radicales afuera que adentro de la UCR. Y los encontré, estaban todos acá, en el ARI*” (LN 1/7).

Mientras tanto, sin contar ya con esos radicales disidentes, la UCR sigue fracturándose, en una lucha intestina que parece no finalizar nunca. Ahora es el turno de dos bloques al interior del radicalismo bonaerense, uno conducido por su presidenta, Margarita Stolbizer, y el otro fiel a los caudillos partidarios Leopoldo Moreau y Federico Storani, que impulsan la candidatura a Senador del “buscavidas” Luis Brandoni. De esta manera, la UCR presentó dos listas para cargos partidarios, tres para

diputados y sólo una nómina para senadores, liderada por el actor mencionado.

Pero existe otro sector disidente en la UCR, además del que pacta con el ARI. Se trata nada menos que del “grupo Olavarría”, denominado así porque está liderado por el intendente de la localidad homónima, Helios Eseverri. Este grupo apoya la candidatura de José Eseverri, hijo del intendente, encabezando las listas de senadores, pero del kirchnerismo, en la séptima sección electoral, y se rebela ante la conducción de Raúl Alfonsín en la provincia (LN 2/7). Para más confusión, la ya mencionada Margarita Stolbizer, coquetea con el grupo Olavarría, es decir, con la transversalidad kirchnerista.

Recordemos que este grupo no es el único sector de la UCR que apoya al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Otro bloque conformado por varios intendentes, y liderado por el de San Isidro, Gustavo Posse, apoya también la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner (LN 3/7).

Por derecha y por izquierda, las mismas complicaciones

Otro espacio que tuvo grandes dificultades en sellar los acuerdos eleccionarios fue el impulsado por el líder de Recrear, Ricardo López Murphy, otro ex radical, y el empresario devenido en político Mauricio Macri, líder de Compromiso para el Cambio. Esta alianza, que tuvo gran cantidad de sinsabores en su conformación, con acusaciones mutuas entre los ahora candidatos aliados, finalmente terminó de conformarse sobre la base de repartirse literalmente el territorio: la provincia de Buenos Aires para López Murphy, y la Capital Federal para Macri.

Hasta en el armado de frentes electorales en la izquierda, aún con muchas menos posibilidades reales de disputar espacios legislativos, la lucha facciosa y los celos partidarios no dejan de destacarse, ni tampoco las sorpresas a la hora de los armados de las listas. Así, también a fines de junio, se anunciaba que Izquierda Unida (MST y PC) incluía en su lista de candidatos a diputados nacionales a Mario Cafiero, quien viene de las filas del propio ARI, espacio ya descrito más arriba. Ante esto, y luego de los ya repetidos fallidos intentos antes de cada acto eleccionario por conformar un frente único electoral de “izquierda”, nuevamente esta posibilidad quedaba descartada, ya que para el Partido Obrero la candidatura de Cafiero significaba traspasar el límite de lo aceptable. Así lo señalaba su máximo dirigente partidario, Jorge Altamira: “*No vamos con los voceros del arzobispado*” (LN 1/7).

Neuquén: todo es posible en la dimensión desconocida

Y hasta ahora sólo nos hemos referido a la Capital y a la provincia de Buenos Aires. En el resto de las provincias la situación no es mejor. En varias, las principales fuerzas no deciden aún candidatos, y siguen intentando tejer alianzas de último momento. Y, como ya señalamos, es tal el desconcierto que la tendencia abstencionista y el rechazo a las principales fuerzas políticas causó en los últimos años, que el cruzamiento de candidatos entre las diferentes fuerzas y el armado de alianzas de acuerdo a cada distrito, sin responder a líneas de acción nacionales, no debe sorprendernos. Debemos entender esto como el intento de reacomodar algo que, pareciera, no tiene vuelta atrás. Nos sirve como ejemplo el caso de Neuquén, donde quizá la tendencia se exagera al máximo, en busca de socavar el poder construido durante décadas por el Movimiento Popular Neuquino, conducido por el actual gobernador provincial Jorge Sospich, quien, a su vez, intenta encontrar un espacio, como candidato presidenciable en el 2007, dentro la alianza López Murphy – Macri.

En Neuquén, entonces, se anunciaba la conformación del Frente Cívico para la Victoria, integrado por el PJ, la UCR, el kirchnerista Partido de la Victoria, el Frente Grande, Patria Libre, y el Frente Participación Neuquina (C 11/6).

Nada de esto es definitivo, sólo son tendencias. Como dijimos, es tal el desconcierto, y tantas las idas y venidas, que hasta último momento muchos de los nombres, de personas y de alianzas, que aquí mencionamos pueden cambiar. Los plazos no están cerrados. De hecho, con algunas artimañas legales, la posibilidad de alianzas recién quedará cerrada definitivamente el 24 de agosto. Pero, de a poco, vamos viendo cómo se van delineando las diferentes opciones electorales.

El dardo eclesiástico al plebiscito kirchnerista

Por último, debemos de destacar, una vez más, la preocupación de la Iglesia nacional respecto de esta disputa. Como hemos dicho en varias oportunidades desde el *Análisis...*, la Iglesia es quizá la institución con mayor sensibilidad a la hora de medir el estado de ánimo de la población, gracias a la penetración que sus miembros logran en lo más profundo de las redes sociales. Y esta voz, recogida por miles de sacerdotes y monjas en cada rincón del país, le permite realizar análisis profundos sobre los “humores” sociales, y expresarlos luego sintetizados a través de sus cuadros principales, obis-

pos y cardenales, en sendos documentos de advertencia y crítica, generalmente a la clase dirigente en su conjunto.

Esta vez fue el turno del arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio, quien sintetizó el hartazgo social de la lucha facciosa descrita más arriba en las siguientes palabras: *“Que no nos empuje la soberbia del internismo faccioso, el más cruel de los deportes nacionales, en el cual, en vez de enriquecernos con la confrontación de las diferencias, la regla de oro consiste en destruir implacablemente hasta lo mejor de las propuestas y logros de los oponentes”* (LN 26/6).

Sin embargo, las palabras de Bergoglio no solo fueron una advertencia en general, sino más bien

un ataque certero al propio presidente Kirchner, en plena disputa facciosa con el duhaldismo, como vimos más arriba. Sobre todo, a su idea de plebiscitar su mandato. En el *Análisis...* N° 60, habíamos visto el rechazo que esta idea causó en todo el arco político opositor, y hasta leíamos este descontento en el propio editorial del matutino La Nación. Ahora fue el turno del rechazo de la Iglesia, en el mismo discurso de Bergoglio, con la típica precisión y agudeza que las palabras del arzobispo de Buenos Aires suelen tener: *“A Hitler lo plebiscitó el pueblo alemán, que le dio amplios poderes para que gobernara por decretos, por decretos secretos”* (LN 26/6).

Conflicto social

Los principales acontecimientos registrados en el mes de junio fueron:

25 huelgas parciales –destacamos los 5 días de paro consecutivos realizados por los docentes de la provincia de Chaco; y los 8 días de huelga de los docentes y padres de alumnos autoconvocados en La Rioja–; 8 jornadas de cortes de ruta, calles, autopistas, puentes; 7 jornadas de marchas y actos; 5 concentraciones frente a edificios públicos y comisarías; 4 jornadas de ocupación de edificio público; 2 bloqueo de boletería.

Las organizaciones y agrupamientos que protagonizaron las jornadas fueron: trabajadores docentes (15); Trabajadores estatales (ATE) (5); docentes del Frente Gremial –Suteba y FEB– (4); trabajadores estatales (3); trabajadores judiciales (3); CCC (3); trabajadores ferroviarios (2); Frente Único Piquetero (2); MTD Aníbal Verón (2); MIJD (2);

Frente Darío Santillán (2); Mov. Teresa Vive (2). Finalmente, trabajadores automotrices (Smata); trabajadores estatales “autoconvocados”; familiares de las víctimas de Cromañón; docentes de Suteba –sector disidente–; trabajadores de los subterráneos; trabajadores del Hotel Bauen; Bloque Piquetero; Partido de los Trabajadores Socialistas; Movimiento Teresa Rodríguez; Polo Obrero.

Entre las principales demandas y consignas observamos: aumento salarial (20); aumento en el monto y/o cantidad de los planes sociales (3); mejores condiciones laborales (3); libertad y desprocesamiento de manifestantes y/o militantes (2); expropiación a favor de los trabajadores de empresa recuperada (2); repudio a acciones represivas del Estado (1); reincorporación de trabajadores despedidos (1); mejora del sistema educativo (1); pago de becas estudiantiles (1).